

*Ministerio Público*  
*Procuración General de la Nación*

Suprema Corte :

- I -

A fs. 30/45, Argencard S.A. promovió demanda contra la Provincia de Entre Ríos, a fin de obtener la devolución de las sumas abonadas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos enero de 1996 hasta abril de 2002, el cual fuera determinado por resolución de la Dirección General de Rentas 117/03, posteriormente confirmada por su similar del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 1377/04.

Explicó que un contribuyente que tributa bajo el régimen de Convenio Multilateral puede calcular correctamente su base imponible total a nivel país y distribuirla entre todas las jurisdicciones en las cuales actúa, pagando el impuesto a cada una de ellas. De esta forma, habrá cancelado el cien por ciento de su obligación.

Empero, indicó que cualquier jurisdicción puede impugnar la porción de base imponible atribuida a las restantes y reclamarla para sí al contribuyente. En consecuencia, se duplica el pago del impuesto, pues éste debe abonar nuevamente a la jurisdicción que reclama el impuesto ya cancelado en aquellas otras a las cuales atribuyó originalmente la parte en disputa.

Por tal razón, agregó, se sancionó el Protocolo Adicional, mediante el cual las jurisdicciones que percibieron impuesto en exceso -por haber recibido base imponible perteneciente a otras- deben reintegrarlo a aquellas a las que corresponda.

Destacó que el *sub lite*:

1. Existe, entre la Provincia de Entre Ríos y Argencard S.A., una diversa interpretación sobre la situación de esta última frente al impuesto;
2. Ello provoca una diferencia de gravamen a favor de la Provincia de Entre Ríos;
3. La diferencia obedece sólo a una atribución en defecto de la base imponible, que perjudicaría a la Provincia de Entre Ríos;
4. Existe resolución determinativa firme de la demandada.

En tales condiciones, señaló que la accionada debe notificar a las restantes provincias el conflicto nacido con el contribuyente, conforme lo ordena el art. 1º -ptos. 1) y 2)- del Protocolo Adicional, como requisito previo para involucrarlo, pues éste queda a la espera de que se complete el trámite legal.

Por ello, requirió que se declare improcedente el rechazo de la accionada a la aplicación del Protocolo Adicional y se ordene la devolución de los montos indebidamente ingresados.

- II -

De conformidad con el dictamen de este Ministerio Público de fs. 48, V.E. declaró que la causa corresponde a su competencia originaria, rechazó la medida cautelar pedida y ordenó el traslado de la demanda (fs. 49/50).

- III -

A fs. 69/74, la Provincia de Entre Ríos contestó la demanda y solicitó su rechazo.

En primer término, opuso la improcedencia de la acción de repetición, pues, aún cuando V.E. decidiera que corresponde que se aplique el Protocolo Adicional, ello no implica -por sí solo- que deben devolverse los importes ya pagados. Entendió que ello es así dado que las restantes provincias podrían guardar silencio o no manifestar disconformidad con la determinación efectuada por Entre Ríos, lo que habilitaría su cobro al particular.

Esgrimió también que, de ordenarse que se someta el caso al trámite del Protocolo y la restitución de los tributos ingresados, se vedaría a los órganos del Convenio Multilateral tratar sobre las cuestiones ya resueltas por V.E.

Respecto al fondo de la cuestión en debate, reiteró que el Protocolo Adicional sólo se aplica cuando media diversidad de interpretaciones entre los fiscos adheridos al Convenio Multilateral, acreditadas de modo fehaciente, y no a las discrepancias que surgen en un procedimiento de fiscalización entre uno de ellos y el contribuyente.

Adujo que la vía idónea para cuestionar la pretensión fiscal era la prevista en el art. 24, inc. b), del Convenio Multilateral. En ese sentido, denunció que, de seguirse la postura de la empresa, todas las fiscalizaciones terminarán en la aplicación del Protocolo, siendo suficiente para ello que el contribuyente manifieste su discrepancia con la verificación y la corrección de su base imponible.

**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

Por último, informó que los intereses y multas aquí cuestionados fueron condonados por el art. 4º de la ley 9576, lo que torna improcedentes los planteos al respecto efectuados por la actora.

- IV -

Pienso que V.E. sigue teniendo competencia para entender en el presente, a tenor de lo dictaminado a fs. 48.

- V -

El art. 1º del Protocolo Adicional al Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1997 establece que el procedimiento allí reglado se aplicará en los casos en que, por fiscalización, surjan diversas interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sujeto al Convenio y se determinen diferencias de gravamen por atribución en exceso o en defecto de base imponible, entre las jurisdicciones en las cuales el contribuyente desarrolla su actividad

Al reglamentar este precepto, la Comisión Arbitral estableció que el Protocolo no será aplicable cuando se determinen omisiones en la base imponible atribuible a todas las jurisdicciones, no obstante la concurrencia de diversas interpretaciones de la situación fiscal del contribuyente (cfr. art. 1º, resolución general N° 19).

En su contestación de demanda, la Provincia de Entre Ríos expresamente negó:

1. que de la determinación efectuada surja que el contribuyente tributó en exceso en alguna jurisdicción (3º párrafo, fs. 69 vta.);
2. que la base imponible total informada por la actora sea correcta (10º párrafo, fs. 69 vta.);
3. que la determinación de deuda fiscal y su pago implique, por sí sola, la indebida percepción de parte del gravamen por incorrecta distribución de la base imponible entre distintas jurisdicciones (12º párrafo, fs. 69 vta.).

Frente a ello, observo que la actora no ha ofrecido prueba alguna tendiente a rebatir estas negativas y demostrar -como es menester para la aplicación del Protocolo que invoca- que la base imponible reclamada por la Provincia de Entre Ríos ha sido atribuida a otras jurisdicciones en exceso, de forma tal que no existe omisión en la base imponible atribuible a todas las provincias durante los períodos en litigio.

El incumplimiento de este requisito, desde mi óptica, sella la suerte adversa de su pretensión y torna inoficioso el análisis de los restantes agravios.

- VI -

Por lo expuesto, pienso que la demanda debe rechazarse.

Buenos Aires 23 de febrero de 2006.-

ES COPIA.

RICARDO O. BAUSSET

*F. Zayat*  
FERNANDO ZAYAT  
PROSECRETARIO JEFE ADJUNTO  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
7/9/05